

# JUSTICIA SOCIAL Y JUVENTUD: RETOS Y PERSPECTIVAS PARA LA SOCIEDAD CUBANA EN EL NUEVO SIGLO<sup>1</sup>

*María Isabel Domínguez*

## Introducción

El tema de la **justicia social**, como prerrequisito indispensable para lograr mayores niveles de **integración social** se colocó obligatoriamente en la agenda de discusión de académicos y políticos, en el contexto internacional de los años 90.

El resurgir de la problemática ante la compleja realidad social revitalizó estas categorías no solo desde el ámbito académico propiamente dicho sino desde el ámbito político y gubernamental, al punto de que el tema de la **integración social** – que incluye el de la **justicia social** – fuera una de las tres dimensiones centrales, junto a los de eliminación de la pobreza y el desempleo, abordadas en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social convocada por Naciones Unidas en 1995<sup>2</sup>.

La evolución del capitalismo, sobre todo en el último tercio del siglo XX, con su dinámica de mayor transnacionalización del capital ha provocado un fenómeno de globalización a escala mundial, o como algunos llaman, de mundialización de la economía, que tiene su correlato en una transnacionalización de la cultura a través de los medios de comunicación masiva – apoyados en el desarrollo de la cibernética y las telecomunicaciones – pero, además, en efectos ecológicos también globales, en esfuer-

---

<sup>1</sup> No publicado.

<sup>2</sup> En el tratamiento dado al tema en dicha Cumbre se concibió la Justicia como una de las cinco dimensiones de la Integración Social y fue definida como el acceso equitativo a los mercados para todos los grupos e individuos, incluidos los más desfavorecidos, y la creación de condiciones para la igualdad y la eliminación de la discriminación de todo tipo, es decir, por razones de género, edad, raza, capacidad física, religión, posición política, pertenencia étnica o nacional, etc. (NN UU, 1995).

zos por crear mecanismos políticos de acción internacional y en acciones militares para imponer un poder unipolar. Este panorama ha ido acompañado de un incremento de las desigualdades y de la agudización de las tensiones sociales en todo el mundo. La crisis económica internacional que ha afectado prácticamente a todas las regiones y el esquema neoliberal con que ha querido enfrentarse, ha demostrado la incapacidad de esos modelos económicos para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la mayoría de la población del planeta, y cómo la creciente satisfacción para una pequeña proporción se produce a costa del permanente deterioro para el resto. Cada día crece la conciencia – incluso en sectores no precisamente de izquierda – de que un sistema basado en la maximalización de la ganancia está condenado a autodestruirse y destruir el entorno en que se desarrolla.

El resultado de estos procesos ha sido un incremento de la polarización a nivel mundial, entre Norte y Sur, y también al interior de las sociedades, incluidas las industrializadas.

Según datos del PNUD, a fines de los años 90, el 20% más rico de la población mundial controlaba el 86% del PIB y el 82% del comercio internacional mientras que el 20% más pobre solo controlaba el 1% del PIB y el 1% del comercio mundial. En una dinámica aceleradamente polarizadora, la diferencia de ingresos entre el quinto de población mundial que vive en los países más ricos y el quinto que vive en los países más pobres era en 1997 de 74 a 1, muy superior a la relación de 60 a 1 de 1990 y a la de 30 a 1 de 1960, concentración que se aprecia entre personas, empresas y países (PNUD, 1999, 2-3).

Los efectos más visibles de esa polarización, claros reflejos de la injusticia social existente, se expresan en un sinnúmero de direcciones, todas las cuales constituyen tendencias de desintegración social. Por ejemplo, el crecimiento de las desigualdades entre países y dentro de ellos impulsa al éxodo masivo del campo a la ciudad y a oleadas migratorias cada vez más intensas del Sur al Norte. Según informes de Naciones Uni-

das, en solo cinco años, de 1990 a 1995, la emigración se duplicó, al extremo de considerar que “ello constituye un éxodo que podría convertirse en la crisis humana de nuestra época” (NN UU, 1995) y para 1997 se estimaban 145 millones de migrantes legales sin contar que, solamente los países europeos calculaban un 50% de inmigrantes indocumentados (PNUD, 1997, 32-33).

Todo ello está agudizando el problema del desempleo, el crecimiento de la pobreza en las zonas periurbanas y el aumento de la delincuencia y la violencia en las ciudades. El terrorismo y la criminalidad, el tráfico de armas, de drogas, de órganos y de niños, han alcanzado escala mundial.

Los conflictos internos de carácter étnico, religioso, cultural y social se han intensificado, lo que ha incentivado guerras y pone en peligro de desintegración a numerosos Estados-Nación.

Estos fenómenos tienen una dimensión espiritual y ética también de considerable magnitud. El entramado social se debilita y con él la solidaridad social. Crece el individualismo y la incertidumbre y en ese marco se refuerzan las creencias religiosas como refugio y búsqueda de apoyos horizontales, aunque en ocasiones ha proliferado el fanatismo religioso que ha favorecido la aparición de numerosas sectas en distintas partes del mundo.

El culto al consumo adquiere también carácter casi místico y se potencian el presentismo y el hedonismo como estrategias – incluso inconscientes – para evadir un presente vacío y un futuro incierto. La competencia es el método más eficaz para alcanzar las metas inmediatas.

En ese mundo altamente competitivo no todos los grupos sociales cuentan con iguales oportunidades y los más desfavorecidos son excluidos de las distintas áreas de la vida social y compulsados cada vez más a la anomia: conductas delictivas, prostitución, drogadicción, suicidio, entre otras.

La magnitud del peligro que hoy representa la falta de justicia social como generadora de muchas de estas tendencias desintegradoras y las proporciones que ya hoy tienen los sectores excluidos – en muchos casos se trata de regiones enteras – con la inestabilidad social y política que provocan y la crisis de legitimidad en que sitúan a muchas instituciones, ha provocado una amplia preocupación y ha ejercido cierta presión para colocar el tema nuevamente en un lugar central del debate teórico.

En el caso de la región latinoamericana, caracterizada desde etapas anteriores por fuertes desigualdades sociales, fortaleció en los años 90 la tendencia al incremento de la falta de equidad y justicia social. Según datos de la CEPAL, el 75% de la fuerza de trabajo ocupada se ubica en el nivel inferior de los ingresos ocupacionales, con un ingreso medio de 2,8 LP (Líneas de Pobreza) aun cuando este segmento es también heterogéneo, en el que se pueden identificar tres estratos, el más bajo de los cuales se encuentra en condiciones de mucha mayor precariedad, de ahí que el número absoluto de hogares en la pobreza continuara creciendo: al finalizar el siglo más de la mitad de los niños y adolescentes y un 43.8% de toda la población vivían sumidos en la pobreza. La polarización de los ingresos ha continuado reforzándose de manera que es aquí donde se localizan diferencias mucho más profundas que en la mayor parte del mundo (CEPAL, 2000).

Esto ha hecho resurgir el tema de las desigualdades y la justicia social en el continente bajo el ángulo de la exclusión para hacer referencia a la expulsión de las relaciones formales de trabajo de sectores antes incluidos, a las nuevas formas de sobrevivencia a partir de la economía informal, a las nuevas formas de sociabilidad que se generan y los nuevos valores que ellas engendran (Sader, 1998, 161).

Todos estos elementos convocan a prestar mayor atención a la categoría justicia social en el análisis sociológico tanto desde el punto de vista conceptual como en la interpretación del material fáctico que brindan las investigaciones, por su valor explicativo de numerosos procesos del funcionamiento de la sociedad.

### **Algunas reflexiones conceptuales.**

Partimos de considerar la **justicia social** como la existencia de una real igualdad de oportunidades para el acceso equitativo de todos los grupos e individuos a los bienes y servicios que brinda la sociedad y la ausencia de discriminación de cualquier tipo, proceso que no puede verse separado de otros dos elementos esenciales para un funcionamiento social en condiciones de integración: **participación** y **cohesión** en torno a valores comunes (Domínguez y Ferrer, 1997).

**Participación** entendida no en sentido estrecho solo como participación política, sino en su sentido más general por lo que ponemos en primer lugar la participación en la vida social y económica a través del acceso al estudio y al trabajo. En nuestro análisis, consideraremos la participación como el acceso y la presencia real de los individuos y los grupos en las instituciones y organizaciones económicas, sociales y políticas de la nación y la posibilidad de intervenir en las decisiones que le conciernen no solo como beneficiarios sino también como formuladores de estas decisiones.

**Cohesión**, entendida como el sistema de valores y normas compartidas por los distintos grupos sociales que conviven y conforman una comunidad social ya sea de carácter local, nacional o regional, que se configura y modifica en el propio proceso participativo.

El hilo conductor entre estos tres procesos es la posibilidad de inserción social real que brinde el modelo socioeconómico, a la vez que los indicadores para evaluar los niveles de **integración social** logrados pasan por la medición de la inserción alcanzada por los grupos e individuos como expresión concreta en el plano estructural de la **justicia social** y la **participación**.

Por tanto, un contexto donde predomine la justicia social y la participación, necesariamente abre espacios para una mayor inserción social de los grupos e individuos, lo que a su vez implica mayores posibilidades para una reproducción democrática de la estructura social, es decir, oportunidades similares para formar parte de cualquier clase,

capa o grupo social y ello también constituye un contexto más adecuado para una socialización en normas y valores que favorezcan la solidaridad y la cohesión.

Esta relación entre justicia social e integración que se da a nivel de toda la sociedad, opera de manera particularmente compleja en el caso de la juventud pues su inserción en la vida social es ya un proceso de integración en sí mismo. Ello hace que la integración para este grupo, más que para ningún otro, tenga una dimensión intergeneracional y otra intrageneracional y que en el sector juvenil se defina más nítidamente que para el resto de la población las posibilidades de justicia social que brinda la sociedad pues es la etapa de la vida en que con más fuerza se da la relación entre oportunidades sociales y perspectivas de futuro.

Quiere decir que el análisis de la relación justicia social – integración social puede ser aplicado desde los contextos societales más generales (internacional, regional y nacional), hasta el nivel de grupos sociales e incluso en el plano del individuo.

En los estudios sobre la realidad cubana ha resultado de sumo interés centrarse en el grupo social de la juventud por las potencialidades de ese sector de la población (que se expresan en cualquier contexto), pero particularmente por su significación actual y perspectiva para la continuidad del proyecto revolucionario cubano, tanto por su aun considerable peso numérico en la población como, sobre todo, por sus rasgos cualitativos y su papel en la sucesión generacional, quienes serán los que marquen la tónica de la integración nacional en el presente siglo.

## **Justicia social e integración de la juventud cubana.**

### **Breve contextualización de la evolución del proceso.**

Entender qué pasa con un grupo específico no es posible sin ubicarlo – aun cuando sea a manera de breve referencia contextual – en el marco del proceso más general de la nación.

La nación cubana, forjada en el fragor de las luchas independentistas del siglo XIX, surgió precisamente con el ideal de justicia e integración social. La liberación de los esclavos para participar en la guerra contra España junto a sus antiguos dueños, dio inicio a un primer momento de integración clasista y racial que se completó con la interacción generacional y la presencia de la mujer aun en el escenario mismo de la guerra. La concepción de Martí “Con todos y para el bien de todos” fue la máxima expresión de ese ideal.

En la primera mitad del presente siglo fue difícil materializar aquellos esfuerzos. Es cierto que comparativamente con la mayor parte de los países latinoamericanos Cuba mostraba menores desigualdades sociales. Por ejemplo, la proporción de analfabetos de la población mayor de 15 años en Cuba en los años 50 era de 22%, mientras en países como Ecuador, México y Brasil era de más de un tercio y en la región centroamericana superaba la mitad del total. En cuanto a analfabetismo juvenil, Cuba se situaba en valores intermedios, cercana a países como Ecuador (23,0%) y México (26,2%), bien distante de algunos como Uruguay (2,7%) o Chile (9,7%), pero también muy distante de otros como El Salvador (45,6%) o Guatemala (57,2%). Igualmente se encontraba en posiciones intermedias en cuanto a las proporciones de población con estudios universitarios y se contaba entre los únicos cinco países de la región que tenían un 30% de mujeres con educación superior (terminada o no). Sus tasas de participación en el mercado de trabajo superaban la media latinoamericana (53,79 para Cuba y 49,74 para América Latina, por encima de países como Chile, Venezuela y Argentina, y la ta-

sa de participación femenina se encontraba en la media del continente (18,93 y 18,23 respectivamente)<sup>3</sup>.

No obstante, a pesar de esa mejor situación comparativa, los niveles de injusticia y desigualdad eran alarmantes. Los datos y documentos de la época reflejan con claridad la magnitud de los sectores excluidos, su fragmentación y heterogeneidad, y el pauperismo de su situación que llegaba en muchos casos a la ausencia de oportunidades para el acceso a los bienes y servicios más elementales al ser humano: empleo, salud y educación.

Por ejemplo, el 48,6% de la población vivía en zonas rurales en las que las condiciones de empleo, salud y educación eran mínimas. El 22% de la población era analfabeta, pero en el campo ascendía al 46%. El índice de camas en hospitales en 1958 era solo de 3,3/1 000 habitantes y el per-cápita para atención médica según el presupuesto nacional era de 2,25 pesos. El desempleo alcanzaba para ese año la cifra de 13,1% entre los hombres y, de los ocupados, el 47,4 lo estaba en la agricultura, por lo que en realidad constituían un sector de subempleados por el carácter cíclico de la producción agrícola. A ello habría que añadir la constante reducción del poder adquisitivo del peso cubano (33% entre 1941 y 1957) (Zuaznábar, 1986).

A esta exclusión de orden clasista había que añadir la discriminación racial y de género y el marcado contraste entre las zonas urbanas y el campo y entre regiones del país.

Por supuesto que para los sectores excluidos de la participación en los bienes y servicios necesarios para reproducir la vida humana se añadía la ausencia de participación política, no solo en etapas dictatoriales sino incluso en aquellas en que un supuesto funcionamiento democrático dejaba al margen a una buena parte de la población.

---

<sup>3</sup> Los datos para Cuba fueron elaborados a partir del Censo de Población, Viviendas y Electoral (Informe General), Tribunal Supremo Popular, Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral, La Habana/1953. La información sobre Educación en América Latina se basa en fuentes de CEPAL citadas por I. Infante en "Juventud: analfabetismo y alfabetización en América Latina", UNESCO, Santiago de Chile/1985 y los datos sobre tasas de participación para la región, provienen de PREALC/OIT, aportadas por la División de Desarrollo Social de la CEPAL en: "Mujeres jóvenes en América Latina: aportes para una discusión", Arca Editorial, Montevideo/1985.



El triunfo revolucionario de enero de 1959 creó las premisas para acelerar el proceso de integración social nacional desde las primeras medidas: Leyes de Reforma Agraria, Ley de Reforma Urbana, Campaña de Alfabetización, Nacionalizaciones de empresas privadas, creación de nuevos empleos, plan de becas, reinserción social de las prostitutas, y tantas otras, crearon las condiciones para satisfacer las necesidades de la población y rescatar su dignidad como seres humanos, como expresión de la justicia social que guiaba el proyecto.

Esas medidas comenzaron a tener repercusiones inmediatas que pudieron apreciarse en el plano de las clases sociales, a partir, en primer lugar, de la eliminación de las bases para la existencia de sectores explotadores y la organización de todas las clases y grupos sociales en torno a la propiedad social. Esto, unido a los intensos procesos de movilidad social ascendente que abrieron oportunidades a las generaciones jóvenes para alcanzar mayores niveles de calificación y de inserción ocupacional y, por lo tanto, para ocupar un lugar en la estructura socioclasista de mayor nivel de implicación y relevancia social.

Ello propició la integración social de la juventud como grupo generacional y como sector dinámico dentro del conjunto poblacional. La ampliación de posibilidades para el acceso a la educación, el empleo y la participación social y política fueron aprovechadas por los jóvenes quienes, a la vez, constituyeron un pilar fundamental desde el punto de vista defensivo. Las tareas más relevantes de toda esa etapa en el plano económico laboral, educativo, militar defensivo y político, tuvieron como principal protagonista a la juventud.

Fue una etapa en la que funcionó un relativo equilibrio entre los mecanismos de socialización y los de participación, en que ambos se interpenetraron y complementaron mutuamente, a la vez que a nivel social se garantizaban los espacios de inserción desde los cuales asegurar un nivel de vida decoroso y concretar el compromiso con el proyecto revolucionario.

La integración que se dio en el plano de las clases y las generaciones se complementó con la eliminación de la discriminación y la desigualdad de oportunidades raciales y de género. En el caso de las mujeres, se produjo una verdadera revolución dentro de la Revolución, con su participación en la educación, el empleo y la vida social y política, que marcó un profundo cambio en su situación de exclusión social de la etapa prerrevolucionaria.

La participación se potenció a los más altos niveles lo que se expresó en la toma de decisiones que fueron el resultado de la voluntad de la mayoría. Las distintas acciones en cualquier esfera, desde la economía hasta la política, contaron con el impulso masivo del pueblo.

Este accionar colectivo para demoler las anteriores estructuras de explotación, construir el nuevo proyecto y defenderlo frente a las agresiones e intentos de destrucción de todo tipo, consolidaron la cohesión de los ciudadanos en torno a los valores nacionales de independencia, justicia social y derecho al desarrollo.

Podría decirse entonces que aproximadamente para mediados de la década del 70 se había logrado consolidar una fuerte integración social en la sociedad cubana, apoyada en los resultados alcanzados en términos de justicia social e igualdad de oportunidades, en términos de participación laboral y política y en términos de una cohesión nacional sustentada en los valores del proyecto revolucionario.

Esto no significa que el devenir del propio proceso no tuviera en algunos momentos excesivos radicalismos o errores de aplicación de determinadas concepciones o políticas, que condujeran, si no a excluir, al menos a limitar la participación de algunos sectores como fue el caso de los creyentes, como resultado de las concepciones ateizantes que predominaron durante las primeras décadas.

En la segunda mitad de los años 70 y en la década de los años 80 se reforzaron algunas de las vías de integración social que fortalecieron este proceso. Por ejemplo, se consolidó la existencia del pleno empleo; la masividad en la educación que elevó el promedio

de escolaridad a noveno grado; el amplio acceso a la educación superior que permitió la formación de amplios contingentes de profesionales procedentes en altas proporciones de la clase obrera y el campesinado; el incremento de la urbanización del país y el esfuerzo por alcanzar un mayor equilibrio en el desarrollo económico y social de los distintos territorios.

Sin embargo, la homogeneidad de muchas de las políticas sociales no consideró suficientemente las desventajas de los diferentes grupos, tanto las históricamente acumuladas como las que se creaban en las nuevas condiciones, lo que comenzó a debilitar el ritmo de los procesos de movilidad social ascendente (Domínguez, 1995).

Estudios de aquellos años, sobre todo de fines de los 80, revelaron el llamado “efecto de tapón” sobre la juventud (Martín, 1991)<sup>4</sup>, cuya máxima expresión fue el crecimiento de los desvinculados del estudio y el trabajo (Domínguez et. Al., 1990), es decir, cierto desfasaje entre las potencialidades de educación y calificación de la juventud y su inserción ocupacional.

De igual forma, la reducción de la actividad social que tuvo lugar en esa etapa en diferentes áreas de la sociedad, hizo disminuir el nivel participativo, una de las dimensiones esenciales para continuar consolidando la integración social (Fernández, 1996). En ese mismo sentido, se redujo la participación social de la juventud en comparación con la que en iguales etapas de la vida tuvieron las generaciones precedentes, cuestión que se discutió con amplitud en el V Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1987 (UJC, 1990).

En este período se produjo entonces cierto desbalance entre la socialización y la participación, con un sobredimensionamiento de la primera respecto a la segunda, aunque

---

<sup>4</sup> Se definió como “efecto de tapón” las limitadas posibilidades de ascenso laboral para los jóvenes que dieron lugar a un cierto desajuste entre sus potencialidades educativas y su inserción ocupacional, por la reducida recirculación de la fuerza de trabajo según la cual las plazas estaban ocupadas no de acuerdo a la capacidad (como indicaba el principio de distribución socialista), sino según el orden de llegada.

tampoco significó que la socialización funcionara sin insuficiencias, la más importante de las cuales fue una tendencia al paternalismo<sup>5</sup>.

Quiere decir que en esa etapa confluyeron insuficiencias en la socialización con reducción de la participación social y con la disminución, aunque aun relativamente reducida, de los espacios de inserción social. Pero, a pesar de esas expresiones, en el período prevalecieron las condiciones de justicia e integración.

Resultados de investigaciones realizadas en esos años constataron el fortalecimiento de la identidad nacional, su clara delineación “apoyada en representaciones y afectos muy consolidados y acompañada de orgullo y compromiso con lo nacional”, así como “una alta autoestima... a diferencia de otros pueblos latinoamericanos” (Torre, 1995, 115).

Sobre este cuadro de partida actuaron sobre la juventud las circunstancias de crisis y reajuste de los años 90.

El escenario de los años 90 se caracterizó por la profunda crisis económica que afectó al país y por importantes cambios resultantes de la estrategia de enfrentamiento seguida para salir de ella, basada en la difícil combinación de elevar la eficiencia económica con la menor afectación de los niveles de justicia social alcanzados.

La convergencia de todo este conjunto de factores, produjo diversos efectos sociales que han tenido una influencia más directa o más mediatizada sobre la juventud, sin olvidar que ello está condicionado en gran medida por las condiciones sociales de partida, en particular el nivel de integración previo y el grado de preparación que tenía la población para enfrentar una situación de crisis.

En estas condiciones de partida confluyeron elementos favorables y desfavorables. El más positivo ha sido sin dudas, el fuerte consenso en torno a valores básicos como la igualdad y la justicia, que ha mantenido a la mayoría integrada al proyecto social y la capacidad creativa y de resistencia que forma parte de la identidad del cubano.

---

<sup>5</sup> Para un análisis detallado del comportamiento de la participación juvenil y de las insuficiencias de la socialización en la década del 80, ver Domínguez, 1994.

Entre los principales elementos negativos habría que mencionar la disminución de la participación y el desarrollo de una conciencia igualitarista, que provocó un disparo de las expectativas de los diferentes grupos sociales no asentadas en el trabajo, resultante del debilitamiento de la conciencia laboral, así como insuficiencias en la socialización juvenil con impactos en el área de los valores (Domínguez, 1994).

### **Significado de la crisis y el reajuste en términos de justicia social, participación y cohesión para la juventud.**

Hay que partir de considerar que la magnitud de la caída económica que se produjo durante esos años implicó una drástica reducción de los niveles de vida de la población cubana, lo que ha significado una considerable afectación para los distintos grupos. Digamos por ejemplo que en solo tres años (entre 1989 y 1992), el consumo per-cápita de los hogares se redujo en 18,5% (ONE, 1996, 87).

Pero también es necesario reconocer que una de las dimensiones principales de la estrategia de reajuste seguida, a diferencia de las soluciones neoliberales, se encaminó a repartir la crisis con equidad, es decir, evitar la toma de medidas puramente económicas que tuvieran un fuerte costo para algunos grupos en particular, como podría haber sido la racionalización laboral indiscriminada o mercantilizar los servicios sociales básicos, a la vez, que se hicieron esfuerzos por compensar aquellos sectores más afectados a través de un reforzamiento de la seguridad social.

Por ejemplo, si se compara la proporción de ocupados dentro del total de personas en edad laboral en 1996 con la proporción de 1987, en los años más agudos de la crisis se produjo una reducción de apenas un 5% a pesar del crecimiento de ese segmento de la población en más de 650 000 personas (CEE, 1987, 68, 193; ONE, 1996, 59, 109). De igual forma se reportó un crecimiento de los gastos en seguridad y asistencia social del 40% entre 1990 y 1996, los cuales subieron del 17% al 24% del total de gastos del presupuesto (en la actividad no empresarial) (ONE, 1996, 99).

Quiere decir que aun en los peores momentos se trata de conservar un nivel de justicia social que evitara el aplastamiento de ningún grupo.

Sin embargo, la naturaleza de la crisis y el tipo de salida que se ha ido configurando como posible en las circunstancias internas e internacionales en que ésta tiene lugar, produce inevitablemente un conjunto de efectos, algunos de carácter estructural, que tienen implicaciones para la justicia social y para los niveles de integración en particular del grupo juvenil.

Elementos tales como la presencia de capital extranjero, el incremento de la actividad turística, el crecimiento de la actividad laboral por cuenta propia, la desestatalización de parte de la producción agropecuaria, la dualización de la moneda y la flexibilización de las regulaciones migratorias y de la política hacia los creyentes son acciones, entre las más significativas, que dejan sentir sus impactos. No es la intención hacer aquí el análisis de dichos cambios en sí mismos, sino evaluar algunos de sus efectos generales sobre la juventud.

Por ejemplo, la diversificación de las formas de propiedad con la apertura al capital extranjero, la creación de las UBPC y de otras formas de trabajo cooperativo y el crecimiento del cuentapropismo, ha tenido importantes repercusiones sobre las condiciones de trabajo y de vida de sectores importantes y está provocando un proceso de recomposición de la estructura de clases de la sociedad, en la que sin duda alguna el componente generacional tiene una particular relevancia en esos cambios. Ello ha dado lugar a:

a) Cambios en la estructura de ocupaciones en el sector formal de la economía (en la que se incluye el empleo en la economía estatal y en el sector emergente), es decir, movimientos de unos puestos de trabajo a otros, tanto los que se han derivado del reordenamiento empresarial y del empleo, como los que se han producido de forma espontánea, pues las condiciones de trabajo y estimulación se han diversificado, lo que ha incrementado las diferencias entre sectores de trabajadores. La existencia de una al-

ta fluctuación juvenil resulta natural si se tiene en cuenta su más alta calificación y mayor disposición al cambio.

b) Presencia de la subocupación, como resultado de la estrategia de no afectar significativamente los niveles de ocupación alcanzados ni los salarios de los trabajadores que no fuera posible conservar en sus puestos como medida inobjetable en términos de justicia social. Aunque se ha reducido sustancialmente en los últimos años como resultado del redimensionamiento empresarial y la reanimación económica, aun deja sentir sus efectos. Los datos del subempleo son muy difíciles de calcular, mucho más para conocer las características particulares de los grupos afectados, pero es posible inferir que en los primeros años de la crisis tuvo una fuerte repercusión sobre los trabajadores jóvenes, pues el sector más afectado fue el industrial, en el cual se concentraban altas proporciones de personas menores de 30 años. Sin embargo, por los rasgos propios de la edad, así como la más elevada calificación de este grupo, se puede suponer que los jóvenes han logrado reinsertarse más rápidamente y en este momento son menos los que se encuentran subocupados.

c) Incremento del sector informal de la economía, tanto de los oficialmente vinculados al trabajo por cuenta propia como su red de empleados y ayudantes. Aunque la magnitud de jóvenes formalmente inscritos como trabajadores por cuenta propia no es alta, es mayor la proporción que labora en el sector como ayudantes --remunerados o no-- en economías familiares. Por esas razones, aunque no se disponen de cifras precisas para los jóvenes, es una opción laboral que abarca a una porción de la juventud<sup>6</sup>.

d) Incremento del cooperativismo, vinculado fundamentalmente a la producción agropecuaria con la constitución de las UBPC, que cuenta con una presencia juvenil en las labores agrícolas mucho mayor que en períodos anteriores<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Para la población en su conjunto, los trabajadores por cuenta propia registrados eran alrededor de 153 000 y representan el 4% de los ocupados mientras en la década anterior apenas alcanzaban el 2% (CEE, 1987; ONE, 2000).

<sup>7</sup> El sector cooperativo abarcaba a fines de la década entre el 8% y el 9% de los ocupados; en 1987 eran solo el 2% (CEE, 1987; ONE, 2000).

e) Alto peso de la desvinculación, es decir, grupos de jóvenes que no se encuentran estudiando ni trabajando, pero no pueden considerarse desocupados porque no están interesados en trabajar. Aunque este fenómeno ya había tenido momentos picos en la segunda mitad de los 80, al arribar a la edad laboral los nacidos durante la explosión demográfica de los años 60, en los años de la crisis las dificultades con el empleo, sobre todo para los nuevos arribantes al mercado de trabajo, así como la insatisfacción con algunas de las opciones existentes, y el desequilibrio financiero existente en el país elevaron la magnitud de los grupos de desvinculados. Según estudios realizados, a mitad de la pasada década el 80% de una muestra representativa de jóvenes desvinculados laboralmente expresó tener quien los mantuvieran (CESJ, 1995) su crecimiento dio lugar a un conjunto de programas sociales para incorporar a los/as jóvenes a diferentes opciones de estudio lo que ha reducido actualmente su número.

Es necesario tener en cuenta, que cualquier análisis sobre la presencia de la juventud en la estructura económica del país debe partir de considerar la significativa reducción de sus efectivos en más de 300 mil personas entre 15 y 29 años en la década de los años 90, lo que representa un decrecimiento del 10% del grupo juvenil. Por tal razón, a pesar de las dificultades con el empleo se produjo un aumento relativo en los económicamente activos y en los ocupados, y no así en los desocupados.

Esta situación se dio con mayor claridad entre las jóvenes, pues aunque la distribución de la población femenina joven entre Población Económicamente Activa (PEA) y No Activa (PNEA) se mantuvo estable en el período más difícil de la crisis, e incluso hubo un pequeño incremento relativo de las ocupadas y un igualmente pequeño decremento (absoluto y relativo) de las desocupadas, se produjo al interior de la PNEA una disminución de la proporción que estudia, la que se redistribuyó hacia los quehaceres del hogar.

Uno de los elementos más significativos de ese período fue la fuerte feminización de la enseñanza superior. A fines de los años 80, las muchachas constituían el 43% de estu-



diantes universitarios del país, pero a fines de los años 90 llegaron a representar el 60% del total (CEE, 1987, 527; ONE, 1996, 298). Esta es un área de análisis de gran relevancia desde el punto de vista de la justicia social pues evidenció los cambios producidos en los roles sociales de la mujer y los espacios de inserción social de que disponen. Pero, a su vez, alertó en el sentido de evitar situaciones que provocaran desventajas para ningún grupo, en este caso, afectaciones para el ingreso en las universidades de los jóvenes varones. Ello es solo una muestra de algunos efectos de interés para la juventud que se produjeron en el ámbito educacional.

Está claro que uno de los más importantes logros de justicia social de la Revolución a lo largo de toda su historia ha sido garantizar el amplio acceso a la educación aun en las circunstancias más complejas. Ello permitió cerrar el siglo con cifras de escolarización del 100% en la enseñanza primaria y del 95% en la secundaria y contar con casi la quinta parte del total de población del país en algún tipo de enseñanza (Granma, 1998).

Tales esfuerzos se han revertido en que, entre las mayores fortalezas con que cuenta el país hoy, se encuentren la calificación de sus recursos laborales y la cultura política de la población.

No obstante, se produjeron cambios que fueron simultáneamente causas y consecuencias del proceso económico más general que ha vivido el país y en particular del laboral, pues los reajustes en las demandas ocupacionales obligaron también a reajustes en el sistema educativo y sus repercusiones se dejaron sentir de forma inmediata sobre la juventud que es su principal usufructuaria.

Las principales direcciones de los cambios durante la década de los años 90 fueron la reducción de la enseñanza preuniversitaria y superior y una ampliación de la enseñanza politécnica tanto en los niveles de calificación básico como medio; cambios en los perfiles con predominio de los vinculados al sector agropecuario y concentración de la

enseñanza preuniversitaria en el sistema de escuelas en el campo para potenciar el vínculo estudio-trabajo a través del trabajo agrícola.

Esa reestructuración ya había sido planteada desde finales de la década de los años 80 como vía de equilibrar las desproporciones que se habían creado en la estructura de la fuerza de trabajo calificada, en la que era muy limitado el nivel básico de la calificación y el nivel superior comenzaba a hipertrofiarse y a partir del curso 1989-90 se iniciaron los cambios. Como resultado, la relación entre matriculados en la enseñanza técnica profesional y en la enseñanza superior varió en un 6% de 1987 a 1996<sup>8</sup> (CEE, 1987, 527; ONE, 1996, 298).

Pero, a pesar de la reducción, hubo momentos en que toda la oferta no logró cubrirse<sup>9</sup>. En ello influía la estructura de la oferta que jerarquizaba aquellas carreras con un papel decisivo para el desarrollo económico y social del país o complementaban déficits acumulados, pero que no siempre resultaban las más atractivas para la juventud, y a la vez, se produjo en el marco de cierta devaluación de los estudios superiores y el trabajo calificado porque, como resultado de los cambios socioeconómicos en el país, surgieron otras vías más rápidas y efectivas de acceso a un mayor nivel de vida.

Por ello, con el objetivo de recuperar el valor de la educación entre la juventud y reinserter a los desvinculados, los nuevos programas educativos implementados recientemente permiten la formación emergente a través de cursos de formación profesional intensivos que preparan a las juventudes para su incorporación al trabajo y para la continuidad de estudios superiores en filiales municipales de las universidades, que facilitan la concurrencia a las aulas con programas especialmente habilitados para una atención directa al estudiante. Estos programas, a pesar de su corto tiempo de existencia,

---

<sup>8</sup> En 1987 del total de estudiantes matriculados en ambos niveles de enseñanza, el 59,5% correspondía a la técnica-profesional y el 40,5% a la enseñanza superior. En 1996, los primeros representaron el 65,5% y los segundos el 34,5%.

<sup>9</sup> En algunos cursos no todos los egresados de preuniversitario se presentaron a las pruebas de ingreso a la universidad y quedaron plazas sin cubrir, por ejemplo, en el curso 1995/96 en el que cinco mil egresados de preuniversitario no se presentaron y tres mil plazas universitarias (entre ellas 1200 pedagógicas y 700 en enfermería) no fueron ocu-

han comenzado a revertir algunas de las tendencias que predominaron en el decenio anterior en la relación juventud – educación y deberán ser objeto de análisis más detenido.

Otra área esencial para valorar los niveles de justicia social de la sociedad es la de la participación sociopolítica, en particular en referencia a la generación joven, por su habitual exclusión de la toma de decisiones en la mayor parte de los modelos de institucionalidad existentes y, en los últimos años, por su apatía y retraimiento político en casi todas partes del mundo.

En Cuba, los indicadores de nivel macrosocial, evidenciaron la conservación de un alto peso de participación juvenil en diferentes actividades sociales y económicas e incluso en la dirección estatal y política. Por ejemplo, en los años 90 el 16% de los miembros de los gobiernos municipales y provinciales de todo el país eran jóvenes.

La pertenencia a las organizaciones juveniles continuó siendo alta: la totalidad del estudiantado pertenece a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) o a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), así como altas proporciones de militantes en las organizaciones políticas<sup>10</sup> a pesar de cierto decrecimiento en el decenio como resultado del incremento de la pasividad en algunos sectores de la juventud frente a tareas de naturaleza social y política

El incremento de la heterogeneidad estructural y de la diferenciación que de ella se deriva, ha producido también una heterogeneidad en el área subjetiva, en particular en cuanto a expectativas, valores y cultura política, lo que se ha expresado en una diversidad de posiciones ante la participación política, que van desde el compromiso activo hasta la pasividad o el descompromiso.

---

padas. Ello motivó un intenso trabajo de la institución escolar y la organización estudiantil (FEEM) y en los cursos siguientes estas cifras se redujeron considerablemente.

<sup>10</sup> En 1994 existían más de medio millón de militantes de la organización política juvenil (Unión de Jóvenes Comunistas), que representaban casi la quinta parte del total de jóvenes entre 16 y 29 años<sup>10</sup>. También existía un contingente de jóvenes menores de 25 años en las filas del Partido, a pesar de que el ingreso con menos de 30 años ha sido solo para casos excepcionales de elevada participación dentro de las filas de la UJC. Si a ello se añade el grupo de militantes del PCC de hasta 35 años, la cifra asciende a la cuarta parte del total de la militancia (UJC, 1995)

Por tanto, en el amplio espectro que hoy conforma la juventud cubana es posible distinguir con claridad la existencia de tres grupos: uno con una fuerte participación, orientada sobre todo a desempeñar el papel que les corresponde como contribución a la solución de los problemas colectivos; un segundo grupo que reconoce a la Revolución por sus proyectos de justicia social e igualdad, mantienen niveles de participación medios, pero con menor implicación personal y cierta pasividad; y un tercer grupo, que se caracteriza por la interiorización de un modelo de bienestar basado en la máxima jerarquización del consumismo, que es a su vez el elemento central de su escala de valores, por lo que no tienen implicación en la realización de metas colectivas y si mantienen algún nivel de participación es de naturaleza formal (Domínguez y Ferrer, 1996).

El análisis anterior revela pues, que el proyecto de la Revolución a la luz de las condiciones de crisis y reajuste que ha vivido el país, ha conservado en lo posible los niveles de justicia social alcanzados en etapas anteriores y está inmerso en un proceso de búsqueda de nuevas vías de inserción social que ofrecer, especialmente a la juventud. Resulta significativo que a pesar de la magnitud de la crisis, los niveles ocupacionales, de inserción educativa y de participación sociopolítica se han mantenido en umbrales elevados y ello es la principal condición para conservar y reforzar la integración social de la juventud, la que se ha podido apreciar en los últimos años en diferentes momentos, desde los esfuerzos laborales y productivos hasta los comportamientos socio - políticos frente a las amenazas externas y el recrudecimiento del bloqueo, lo que ha permitido mantener altos niveles de cohesión social a pesar de las profundas dificultades por las que ha atravesado el país.

Eso no excluye que, simultáneamente, se aprecien en ciertos sectores de la juventud actitudes individualistas, presentistas y hedonistas, que lesionan esa cohesión social encaminada al logro de metas colectivas a largo plazo. No es posible desconocer que se han producido, y continuarán produciendo, afectaciones reales que sitúan a algunos

grupos en condiciones de relativa desventaja, y ha tenido lugar un incremento de las desigualdades sociales que comienza a provocar una diferenciación de situaciones.

### **Reflexiones finales**

Un esbozo preliminar del cuadro de los impactos que ha producido la crisis de los años 90, así como el comportamiento actual de la política socioeconómica del país evidencia los notables esfuerzos que se realizan para mantener y elevar los niveles de justicia social alcanzados y muestra simultáneamente, elementos favorecedores y obstáculos para la integración social de la juventud en los marcos de la Revolución, a partir de sus rasgos actuales, tanto de sus fortalezas como de sus debilidades.

Entre los principales **elementos favorecedores** se encuentran un aumento del nivel de descentralización que propicia mayor autonomía de las instituciones, organizaciones y territorios; un uso más racional de los recursos y las potencialidades propias; una conciencia de la necesidad de reformulación de las metas sociales a alcanzar desde nuestras propias circunstancias; una reanimación del pensamiento social y político que retoma las raíces y abre nuevas potencialidades al análisis y el debate de ideas, lo cual limita el formalismo y el dogmatismo. Todos estos elementos contribuyen a reforzar la cohesión nacional y son condición básica para una participación más efectiva.

En el plano de los efectos concretos de la estrategia de reajuste, como elementos positivos es posible mencionar:

- Importantes pasos hacia la reducción del igualitarismo a través de nuevas formas de estimulación en correspondencia con la cantidad, calidad y el significado social del aporte laboral, en algunos renglones decisivos. Esto estimula la realización de un mayor esfuerzo y favorece la formación de grupos de referencia internos que no son ajenos al modelo social.
- La paulatina recuperación del valor de la moneda nacional que impulsa a los jóvenes a la búsqueda de empleos que garanticen un ingreso estable.

- La diversificación de los espacios de inserción laboral a partir de la diversificación de las formas de propiedad.
- Pasos hacia la descentralización que pueden favorecer la autonomía y creatividad juvenil.

Entre los principales **obstáculos** podrían enumerarse:

- La insuficiente disponibilidad de empleos atractivos para la juventud.
- La débil correspondencia entre esfuerzo laboral y posibilidades de satisfacción de aspiraciones individuales mediante el salario, lo que propicia la búsqueda de vías alternativas para lograrlo.
- La débil capacidad de los mecanismos de control social que permiten la utilización de esas vías alternativas para la satisfacción de aspiraciones individuales, violatorias de normas morales y jurídicas, muchas veces a partir de los recursos del Estado o de los bienes de otros ciudadanos.
- La estratificación de los espacios laborales, desde los muy atractivos hasta los rechazados por una alta concentración de condiciones desfavorables, lo que genera competencia por el acceso a unos y el desinterés por otros.
- La debilidad de los mecanismos de recirculación de la fuerza de trabajo, para abrir espacios a jóvenes más idóneos que otros trabajadores ya ocupados. Esto complejiza el panorama del empleo juvenil.
- El incremento de las desigualdades sociales entre grupos de la juventud.

Tanto elementos favorecedores como obstáculos generados por la aplicación de las actuales políticas, se conjugan con las características del grupo juvenil, cuyas principales **fortalezas** han sido sus elevados niveles educativos y de calificación y sus altas expectativas, que pueden actuar como elementos movilizados hacia un mayor esfuerzo.

De igual forma, sus principales **debilidades** son cierto desbalance de dichas expectativas hacia el área del consumo material, así como cierta pasividad.

A partir de estos elementos y teniendo en cuenta, sobre todo, el incremento de la heterogeneidad juvenil, se requiere una consolidación del ritmo de la recuperación económica moderada que ha tenido lugar en los últimos años y de la eliminación paulatina de los obstáculos señalados, en especial un incremento del papel del salario en moneda nacional en la solución de las necesidades del individuo y un fortalecimiento del control estatal sobre sus recursos, lo cual permitiría esperar un conjunto de comportamientos, que tiendan a eliminar gradualmente algunos de los problemas actuales:

- Incremento del interés por encontrar trabajo o permanecer en aquellos puestos que garanticen ingresos estables.
- Recuperación de la disciplina laboral en función de garantizar dichos empleos y dichos ingresos.
- Disminución de estrategias alternativas violatorias de normas jurídicas o morales.
- Recuperación del interés por obtener una calificación de nivel medio o superior.
- Incremento de la participación social.

En resumen, el grupo juvenil en Cuba ha enfrentado numerosas dificultades derivadas de la crisis socioeconómica que el país ha atravesado y de la que había comenzado lentamente a salir, pero apoya la continuidad del proyecto cubano como alternativa que garantiza justicia social para la totalidad de la juventud.

Por ello, en circunstancias en que la Revolución se ha visto obligada a redefinir qué es lo realmente esencial en términos de justicia social y aceptar desigualdades indeseadas en toda la etapa precedente, se deben continuar ampliando las condiciones para elevar los niveles de participación de la generación joven.

De ahí que la política social hacia la juventud deba contener un fuerte balance entre las posibilidades de inserción social que se abran desde el punto de vista económico y la

socialización en valores claves como la solidaridad y el colectivismo, el sentido del deber y el significado de la nación, de manera que se encuentre mejor preparada para su vida en el nuevo siglo.

## **Bibliografía**

Castro, Fidel (1975). *La historia me absolverá*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana.

CEE (Comité Estatal de Estadísticas) (1987). Anuario Estadístico de Cuba. La Habana.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina) (1985). *Mujeres jóvenes en América Latina: aportes para una discusión*. Arca Editorial, Montevideo.

----- (1997). Panorama social de América Latina. 1996. Santiago de Chile.

----- (2000) Panorama Social de América Latina. 1999-2000.

<http://www.eclac.cl>

----- (2000) Capital Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe. <http://www.eclac.cl>

CESJ (Centro de Estudios sobre la Juventud) (1995). Estudio sobre los desvinculados laborales. La Habana.



Domínguez, María Isabel (1994). Las generaciones y la juventud: Una reflexión sobre la sociedad cubana actual, (Tesis Doctoral, inédito). Fondos del CIPS, La Habana.

----- (1995). Generaciones y procesos sociales en Cuba. En: Revista *Contracorriente* No. 1. La Habana.

----- y M. E. Ferrer (1996). ***Jóvenes Cubanos: Expectativas en los 90.*** Edit. Ciencias Sociales. La Habana.

----- y M. E. Ferrer (1997). La integración social de la juventud cubana. Reflexión teórica y aproximación empírica. (Inédito) Fondos del CIPS, La Habana.

----- et.al. (1990). Características generacionales de los estudiantes y los desvinculados del estudio y el trabajo. (Informe de investigación), Fondos del CIPS, La Habana.

Infante, Isabel (1985). *Juventud: analfabetismo y alfabetización en América Latina*. UNESCO, Santiago de Chile.

Fernández, Olga (1996). Cuba: participación popular y sociedad. En: H. Dilla (Comp.) ***La participación en Cuba y los retos del futuro.*** Edic. CEA. La Habana.

Martín, Juan Luis (1991). Youth and the Cuban Revolution: Notes on the Road Traversed and Its Perspectives. En: *Latin American Perspectives*. Vol.18, No.2, Spring. Sage Publications. pp.95-100.

----- (1994). Ponencia presentada al Taller “Las ONG’s cubanas ante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”, Centro de Estudios de América, La Habana.

NN UU (Naciones Unidas) (1995). Proyecto de Declaración Final, presentado en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, Copenhague.

----- (1995a). Informe sobre Población. N.Y.

ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) (1996). Anuario Estadístico de Cuba. La Habana.

Periódico Granma. (1998). Editorial. 1ro de septiembre, La Habana.

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) (1999). Informe sobre Desarrollo Humano. Mundi-Prensa Libros, Madrid, España.

Sader, Emir. (1998). Brasil: una cartografía de la injusticia. En: E. Sader (Ed.). ***Democracia sin exclusiones ni excluidos***. Edit. Nueva Sociedad, Caracas.

Torre, Carolina de la (1995). Conciencia de mismidad: identidad y cultura cubana. En: Revista *Temas* No. 2. La Habana.

Tribunal Supremo Popular, Oficina Nacional de los Censos Demográfico y Electoral (1953). Censo de Población, Viviendas y Electoral (Informe General), La Habana.

UJC (Unión de Jóvenes Comunistas) (1990). *Sin formalismos*. Informe Central al V Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Editora Abril, La Habana.

----- (1995) Datos del Departamento de Estadísticas, La Habana.

Vila, Carlos M. (1998). Buscando al Leviatán: hipótesis sobre ciudadanía, desigualdad y democracia. En: Emir Sader (Ed.), op. cit.

Zuaznábar, I. (1986). *La economía cubana en la década del 50*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana.